



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano

Lizeth Camila Serrano Ariza¹

Resumen

La presente investigación se ha concentrado en examinar con detalle la realidad de las Cárceles y los Centros Penitenciarios, en particular, lo relacionado con los derechos humanos de la población privada de la libertad, Por consiguiente, es indispensable identificar cuáles son los planes de intervención de inmediato, corto y mediano plazo del Gobierno Nacional, para superar el estado de cosas contrarias a la constitución en los establecimientos de reclusión en Colombia, al igual que los proyectos y planes adelantados por el Comité Interdisciplinario conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y del Derecho (responsables de liderar el proceso), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios.

Palabras claves: Estado de Cosas Inconstitucionales, Colombia, Corte Constitucional, Derechos Fundamentales, Vulneración, Penitenciario, Carcelario.

Abstract

The present investigation has concentrated in examining in detail the reality of the Prisons and the Penitentiary Centers, in particular, what is related to the human rights of the population deprived of liberty. Therefore, it is essential to identify these are the immediate, short and medium term plans of the National Government, to overcome the state of things contrary to the constitution of the rights of imprisonment in Colombia, as well as the projects and plans advanced by the

¹ Artículo resultado de investigación elaborado para optar por el Título de Abogada en la Universidad Católica de Colombia por parte de estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo institucional: lcserrano44@ucatolica.edu.co. Este artículo fue dirigido por el doctor Alfonso Daza docente investigador de la Universidad Católica de Colombia.

Interdisciplinary Committee formed by the Ombudsman's Office, the Ministry of Justice and Law, the National Penitentiary and Prison Institute and the Penitentiary Prison Services Unit.

Key Words: State of unconstitutional things, Colombia, constitutional court, fundamental rights, vulneration, penitentiary, prison.

Sumario

Introducción. 1. Antecedentes del ECI. 2. Características ECI. 3. ECI en el Sistema Penitenciario y Carcelario. 4. Acción de tutela como mecanismo de protección de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad. 5. Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el ECI en Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano. 6. Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario. 6.1. Racionalización del ingreso del Sistema Penitenciario y Carcelario. 6.2. Infraestructura Carcelaria. 6.3. Vida en Reclusión. 6.4. Resocialización. 6.5. Transparencia. 7. Proyectos adelantados por el Comité Interdisciplinario para la superación del ECI. 7.1. Creación de batería de indicadores. 7.1.1 Resocialización. 7.1.2 Derecho a la salud. 7.1.3 Servicios públicos. 7.1.4 Alimentación. 7.1.5 Acceso a la administración pública y de justicia. 7.1.6 Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. 8. Proyecto de atención Pos-Penitenciaria para la disminución de la reincidencia (Casa Libertad). 9. Capacitaciones a los Gobernadores Locales y Departamentales. 10. Cartilla sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario. Conclusiones. Bibliografía.

Introducción

La situación tan crítica por la que atraviesa los centros de reclusión Colombianos no es una novedad, esta condición de alarma se viene presentando desde 1995, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, reveló con cifras alarmantes el crecimiento desmesurado de la población privada de la libertad (Defensoría del Pueblo, 2003), ocasionando así problemas de hacinamiento en cuanto a las condiciones de habitabilidad dentro de las celdas, problemas de

alimentación, salubridad y no menos grave el acceso a los programas de resocialización, que como se sabe es uno de los fines esenciales de la pena, como el derecho a la enseñanza o al trabajo.

La Honorable Corte Constitucional, respecto a esta problemática se viene pronunciando durante las últimas dos décadas, identificando los factores que implican un Estado de Cosas Inconstitucional así: **(i)** Vulneración masiva de derechos fundamentales a un grupo determinado de personas, **(ii)** Omisión por parte de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, como lo es, garantizar los mínimos constitucionales dentro en una sociedad para ese grupo de personas, **(iii)** La adopción de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar derechos fundamentales, **(iv)** Existencia de un problema social que requiere intervención conjunta del Gobierno Nacional (Quintero, 2011), para coordinar las acciones y recursos que demande el esfuerzo humano y presupuestal para superar el Estado de Cosas Inconstitucional, en este caso en particular la crisis en los Centros Penitenciarios y Carcelarios del país.

La corte advirtió la necesidad de establecer metas que deben dar cuenta de los avances en la protección de los derechos constitucionales de la PPL², pues el Estado debe procurar la garantía efectiva de los mismos, imponiendo así, al aparato estatal mayores deberes en este escenario, por el hecho mismo de la reclusión, que hace imposible para las personas privadas de la libertad garantizar por sí mismas condiciones idóneas de vida.

Como se puede observar esta es una problemática que como Estado Colombiano nos aqueja desde hace varias décadas sin lograr aún la superación definitiva del ECI³, pese a los grandes esfuerzos humanos y presupuestales por parte del Gobierno Nacional, el presente artículo buscar resaltar de una clara cuál es ese papel preponderante actual que desempeña el Ministerio de Justicia como cabeza líder del sector justicia, junto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y la Defensoría del Pueblo, respecto a su compromiso adquirido con el Gobierno Nacional y la Honorable Corte, para la superación definitiva del ECI.

Para el desarrollo de esta investigación se tendrá como base, las sentencias emitidas por la Honorable Corte, respecto a esta problemática, los informe de seguimiento presentados por el

² Población privada de la libertad

³ Sigla con la que se describe un “estado de cosas inconstitucional”. En esta investigación se entenderá como el mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en Colombia.

Comité a la Honorable Corte, los informes estadísticos presentados por INPEC, los informes presentados por la Defensoría del Pueblo en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de las personas en reclusión, las mesas de trabajo interinstitucionales celebradas durante los últimos meses y no menos importante los artículos de investigación sobre el tema, no solo en Colombia sino en América Latina.´

1. Antecedentes del ECI.

La Constitución Política de 1991 dio origen a la acción de tutela como la herramienta de defensa más efectiva hasta aquel entonces para la protección de los derechos fundamentales de la población Colombiana, es de anotar que la vulneración de los mismos se presentaban desde tiempo atrás, pero fue hasta septiembre de 1997 cuando la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU559 de 1997 creo la institución jurídica del ECI, herramienta de protección de derechos y materialización del Estado Social y Democrático de Derecho, quizá uno de los principales aportes del constitucionalismo Colombiano a la jurisprudencia nacional e internacional (Ramírez, 2013).

Desde el pronunciamiento de la Honorable Corte, los derechos fundamentales pasaron a ser realidad; la tutela y las acciones populares facilitaron este proceso (Blandón, 2017), dando origen a históricas sentencias sobre el mínimo vital, derechos sociales, diversidad étnica, derechos de las mujeres, desplazados, salud, etcétera, le mostró a los ciudadanos que la igualdad de derecho se estaba convirtiendo en una igualdad en los hechos (Montenegro, 2015).

De esta forma y en razón de sus funciones, la Corte declaró el ECI en varias ocasiones; la primera, en la sentencia T-068 de 1998 a la Caja Nacional de Previsión , ordenando que se creasen mecanismos administrativos que fueran eficientes en la protección real del derecho de la seguridad social de las personas afectadas en la resolución de peticiones de reconocimiento y reliquidación de pensiones, lo que vulneraba el derecho de petición y llevaba a que dichas personas interpusieran numerosas acciones de tutela por los mismos hechos fácticos y jurídicos contra esa entidad, que llevaba a que se congestionara el aparato judicial afectando el cumplimiento de las obligaciones del mismo (Saravia Caballero, 2015).

Posteriormente la sentencia T-153 de 1998, declaró el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del territorio nacional, ordenando así al Instituto

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar un plan de construcción carcelaria tendente a garantizar las condiciones de vida dignas de todas las personas privadas de la libertad, desde entonces la Honorable corte viene haciendo pronunciamientos de forma periódica, mediante sentencias o autos de seguimiento sobre esta problemática.

Otra proclamación del ECI se dio en la sentencia SU-250 del mismo año, debido al incumplimiento del artículo 131 de la Constitución, dado que él mismo prescribe en el numeral 9 que los notarios se deben escoger por concurso público y hasta esa fecha no se había hecho. Basándose en las características del ECI, la Corte emitió la orden de proceder a convocar concurso público de notarios, dentro de los 6 meses siguientes, al Superintendente de Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Administración (Vargas Hernández, 2003).

Nuevamente, en el mes de octubre, la sentencia T-590 del 98, declaró un Estado de Cosas Inconstitucional al verificar la falta de protección a los defensores de derechos humanos y, en consecuencia, hizo un llamado a prevención a todas las autoridades de la República para que cese tal situación (Saravia, 2015).

La última sentencia del año 1998 fue la T-289, que protegió el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas de los empleados del municipio de Ciénaga del departamento del Magdalena. Años más tarde, la sentencia T-025 de 2004, lo declaró por la violación de los derechos de la población desplazada en Colombia (Quintero, 2011).

Estas situaciones demostraban una flagrante violación de múltiples derechos fundamentales en el territorio colombiano, razones que llevaron a la Corte a emitir distintas órdenes a los órganos del Poder Público, con el fin de proteger a esas minorías del territorio olvidado, no solo por la sociedad sino por el Estado mismo.

2. Características ECI.

La principal función de la Corte Constitucional es la de velar por la supremacía e integridad de la Constitución, por medio de la aplicación e interpretación de las normas para casos concretos

(Mateo, 2010), es así como en sus distintos pronunciamientos a determinado como principales características del ECI las siguientes:

- “Es un Mecanismo protector de DDHH.
- La declaratoria formal del ECI debe estar en la parte resolutive.
- Sentencia declaradora de un ECI por sí misma es impulsadora de Políticas Públicas. Rompe con los esquemas tradicionales de los efectos inter-partes que caracterizan los fallos de tutela pues sus efectos Erga Omnes.
- La declaratoria del ECI no es un problema jurídico, es una herramienta creada por la Corte Constitucional para salir de un estado estructural.
- La carga de demostrar que las condiciones que dieron lugar a la declaratoria del ECI han sido superadas recae sobre el Gobierno Nacional.
- Emisión de órdenes complejas.
- Mecanismo Excepcional” (Montenegro, 2015, págs. 5,6).

La Doctora (Hernández, 2003, p. 203-338), lo define como “La ausencia de políticas públicas claras en aspectos de la vida pública nacional, o la presencia de insuficiencias graves o de contradicciones entre las existentes, constituyendo una situación de hecho que termina lesionando de manera grave un amplio catálogo de derechos fundamentales”.

Por su parte, el doctrinante (Plazas, 2008, pág. 55) establece otras características, que llevan a la declaratoria del ECI, así: “Cuando concurren la violación masiva de derechos fundamentales, las deficiencias estructurales para su atención y la falta de voluntad de las autoridades estatales, en todo o en parte del territorio nacional, de forma tal que, ante esa situación, se puede generar una gran proliferación de tutelas”, con graves consecuencias para la congestión de los despachos judiciales.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el ECI, es una figura necesaria y legítima, que genera obligación en las autoridades administrativas, en tanto son también órdenes judiciales y que el seguimiento que se debe hacer a las decisiones de la declaratoria de un ECI, generan también una obligación para el juez constitucional (Díaz, 2017).

3. ECI en el Sistema Penitenciario y Carcelario.

La libertad individual como derecho fundamental no solamente es sustancia de la vida misma sino pilar fundamental de la vida en sociedad (Rosario, Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del, 2011), por ende es preocupante la situación de vulnerabilidad a la que se ve sometido el privado de la libertad, en lo que a la garantía de sus derechos fundamentales se refiere, como lo es derecho a la dignidad, la vida e integridad personal, la familia, la salud, la educación y el trabajo (Sentencia T-296 de 1998).

Algunos puntos que se destaca la H. Corte, respecto de las condiciones de los internos son: **i)** Los hombres y mujeres deben ser reclusos en los centros carcelarios y penitenciarios de forma separada, de acuerdo a su edad, antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. **ii)** Los lugares destinados al alojamiento de los internos durante la noche deberán cumplir con las normas de Higiene, habida cuenta del clima, ello en cuanto al volumen del aire, alumbrado, calefacción y ventilación. **iii)** Los reclusos deberán permanecer aseados para lo cual deberán ser dotados de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. **iv)** Cada recluso dispondrá de una cama individual y mudada con regularidad con el fin de mantener su limpieza. **V)** Toda persona que se encuentre interna en un establecimiento carcelario tendrá derecho a recibir su alimentación en buena calidad, bien preparada y servida en las horas acostumbradas y podrá hacer uso del agua cuando lo necesite (Estanislao, 2015, p. 24-25).

La corte ha sido clara en establecer que en el Sistema Penitenciario y Carcelario, existe un estado de cosas contrario al orden constitucional, caracterizado por una reiterada y sistemática vulneración de estos derechos fundamentales, en donde tienen injerencia diversas autoridades y que son ellas mismas que mediante su articulación, deben trabajar en la superación definitiva del ECI de manera ardua en contra de las inhumanas condiciones en las que permanecen los privados de la libertad, donde es el Estado el que debe asumir esos gastos de alojamiento y alimentación de los reclusos en condiciones dignas (Rodríguez Pineda, 1998).

En éste caso, el reproche no se materializa sobre el funcionario, sino en la disfuncionalidad institucional debido a que las instituciones con el tiempo son abrumadas por la obsolescencia, requieren cambios y esos cambios demandan recursos y voluntad política, a falta de estos, las instituciones pierden su capacidad logística, reflejada en la falta principalmente de personal e

infraestructura, en este caso se pudo ver en la declaratoria de la situación del sistema penitenciario y carcelario (Montenegro, 2015).

4. Acción de tutela como mecanismo de protección de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela se convirtió en la herramienta de defensa de los DDHH más efectiva para aquel entonces de toda la población colombiana; empero la complejidad de los asuntos que comprometían derechos fundamentales y los niveles de afectación que indicaban una patológica desatención estatal, develaron necesidades mayores que se escapaban a los recursos normativos brindados por este mecanismo. (Aguilar Castillo & Bohórquez, 2006)

La relación de esta herramienta jurídica de carácter jurisprudencial con la tutela, es que esta figura se puede destacar como una garantía constitucional, específicamente por el amplio espectro de acciones y vinculaciones de diferentes ramas del poder público en pro de la protección de los derechos fundamentales, donde la tutela es un eslabón o un requisito procesal en tanto que a través de este mecanismo la corte llega a conocer la situación y a declarar el ECI. (Montenegro, 2015).

Esta nueva relación entre derechos fundamentales y juez constitucional significa un cambio esencial en relación con la Constitución de 1886. Este cambio trajo consigo la protección de derechos de todos los colombianos y más de la población vulnerable, como es el caso de las personas privadas de la libertad, otorgándole al juez y al legislador ese deber de protección y garantía material de derechos fundamentales (Rojas, 2012), en este orden de ideas, la Corte Constitucional al revisar los fallos de tutela, en principio solo producen efectos inter-partes, es decir, circunscritos al ámbito de acción del proceso en particular. no obstante, la Corte ha establecido la posibilidad de que sus fallos de revisión produzcan efectos más allá de las partes involucradas en el proceso (Universidad Nacional Autónoma de México, 2015). Respecto a los derechos que protege el ECI, desde la SU-559 de 1997 hasta la SU-090 de 2000 se manejó la expresión “Derechos Fundamentales”, posteriormente en la sentencia T-025 de 2004 se habló de “Derechos Constitucionales” (Chinchilla, 2009).

5. Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el ECI en Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano.

La sentencia de mayor trascendencia en la jurisprudencia constitucional y en especial, en materia de declaratoria del ECI es sin duda la T-153 de 1998, esto debido a que es la primera sentencia que lo declara en materia carcelaria (Mateo, 2010), ordenando se diseñara he implementara, dentro de los tres meses posteriores al fallo, un plan que protegiera los derechos fundamentales de los reclusos en las prisiones del país, buscando reducir el hacinamiento y mejorando las condiciones de reclusión. La situación fue detectada una vez la Corte pudo verificar las verdaderas condiciones de habitabilidad y la mala presentación en los servicios de alimentación y salud que se presentaban hasta la fecha.

Ese mismo año, en otras dos sentencias la T-606 y la T-607, la Corte nuevamente volvió a hacer uso de la técnica jurídica del ECI para ordenar nuevas acciones, especialmente en materia de salud y suministros médicos a los reclusos; más tarde en el año 2000, la sentencia T-847, ordenó separar persona que estaban en calidad de sindicados de las personas con sentencia condenatoria en firme, es de anotar que la sentencia T- 815 del 2013 nuevamente reafirmo esta orden.

Posteriormente, la sentencia T-388 del mismo año, ordenó al INPEC⁴, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación, elaborar en un término de tres meses a partir de la notificación de esa sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales.

Años más tarde, el Auto 121 del año 2018, proferido por la Sala Especial de seguimiento de sentencias, la Corte Constitucional unificó la sentencia donde se declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, situación que fue reiterada mediante la Sentencia T-762 de 2015, el fin de esta unificación en el año 2018, fue analizar y reorientar estrategias de seguimiento para la superación del ECI.

Cabe anotar que actualmente, este Estado de Cosas Inconstitucional aún persiste, motivo por el cual el Gobierno Nacional, acatando las labores de articulación señaladas por la Corte

⁴ Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

durante los últimos años, diseñó un esquema de seguimiento a las órdenes de las sentencias y de los autos de las últimas dos décadas, que incluye una herramienta en la que se pueden visualizar todas las órdenes del fallo, las entidades que deben cumplirlas, los plazos y otros criterios de verificación de gestión.

Por su parte, el Comité Interdisciplinario conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y del Derecho (responsables de liderar el proceso) se han concentrado en examinar con detalle la realidad de las cárceles y en los centros penitenciarios, en particular, lo relacionado con la vigencia de los derechos humanos.

Frente a este punto, con mucha preocupación, el actual Presidente de la República encontró varias falencias relacionadas con el cumplimiento de las providencias de la Corte, que constituyen aspectos críticos en la superación del estado de cosas inconstitucional, como lo es, que cuatro años después de la orden dada por la sentencia T-762 de 2015, aún no se cuente con una línea base, ni con indicadores definitivos de goce efectivo de derechos, elaborados a partir de los mínimos constitucionales asegurables.

6. Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario.

Como respuesta a múltiples problemáticas identificadas en el sistema Penitenciario y carcelario colombiano, el Gobierno Nacional diseñó un Plan de Intervención Integral para el periodo 2019-2022.

Las acciones están basadas en el respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión, con un enfoque de prevención, desarrollo humano y territorial, que contempla las necesidades particulares de los actores que integran el SPC⁵.

El Plan tiene previsto implementar estrategias eficaces, perdurables en el tiempo, que estén enfocadas hacia la humanización del tratamiento de las personas privadas de la libertad, así como un proceso de resocialización satisfactorio (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019).

Concretamente, se desarrollan los siguientes 5 pilares (4 estratégicos y 1 transversal) así:

⁵ Sistema Penitenciario y Carcelario.

6.1. Racionalización del ingreso del Sistema Penitenciario y Carcelario.

Según el sexto informe semestral del Gobierno Nacional al estado de cosas inconstitucional, este pilar tiene como objetivo lograr una articulación entre las medidas normativas (legislativas) y de funcionamiento del sistema penal - destinación de recursos institucionales para la administración de justicia, autoridades investigativas y estrategias de seguridad - (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019) esto con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y promover efectivamente la reinserción social de quienes han sido sancionados.

El Gobierno Nacional estableció las siguientes acciones:

- Realizar brigadas jurídicas.
- Ajustar procedimientos administrativos para reducir el hacinamiento (notificaciones judiciales, identificación de extranjeros, trámite de audiencias).
- Aprobar el Plan Nacional de Política Criminal.
- Realizar una campaña de sensibilización a la comunidad sobre los efectos de la Política Criminal.
- Fortalecer las instancias de Política Criminal.
- Desarrollar propuestas normativas para una Política Criminal coherente, racional y estable (Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Penitenciario, Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes).
- Fortalecer las medidas de vigilancia dentro de cada ERON (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019).

6.2. Infraestructura Carcelaria.

Está conformada por 133 establecimientos, instalados en 121 municipios con la siguiente distribución: 126 Establecimientos Penitenciarios y/o Carcelarios, 3 Complejos Penitenciarios y Carcelarios, 2 Complejos Metropolitanos Penitenciarios y Carcelarios y una (1) Colonia Penal Agrícola, agrupados en 6 Regionales (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario., 2019)

TABLA 1. Distribución ERON por rangos de cupos

Rango en cupos	Establecimientos		Capacidad		Población intramural	
	Cantidad	Participación	Cupos	Participación	Cantidad	Participación
Superior a 1.000 cupos	25	18,8%	16.658	20,8%	25.436	21,4%
Entre 301 y 1.000 cupos	27	20,3%	15.720	19,6%	20.158	17,0%
Entre 201 y 300 cupos	12	9,0%	13.446	16,8%	19.943	16,8%
Entre 101 y 200 cupos	28	21,1%	15.149	18,9%	25.027	21,1%
Hasta 100 cupos	41	30,8%	19.254	24,0%	28.205	23,7%
Total	133	100,0%	80.227	100,0%	118.769	100,0%

Fuente: GEDIP – Enero 2019

Según el informe estadístico presentado por el INPEC en enero del presente año, la capacidad de un ERON se mide de la siguiente manera:

(...) Por el registro de nuevos cupos por construcción, ampliación de infraestructura, remodelación o adecuación física, incluye también las disminuciones presentadas por cierre temporales o definitivos de un establecimiento, pabellón o estructura en razón a los daños ocasionados por el tiempo, la indebida utilización de las instalaciones y/o deterioro del edificio, la deficiencia en los servicios públicos, por orden de autoridad judicial, en ocasión al Plan de Ordenamiento Territorial o vetustez de la infraestructura que amenace la integridad física de las personas que la habitan (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2019, p. 22-23).

Aunado a lo anterior, el Gobierno Nacional actualmente trabaja en el mantenimiento y construcción de cupos carcelarios, así como en la búsqueda de soluciones alternativas a la infraestructura tradicional, garantizando las condiciones físicas y de servicios carcelarias, para ello, busca entregar más de 15.000 cupos, distribuidos en 4.800 en ciudadelas móviles, 3.860 en infraestructura dura de cuarta generación y 6.720 cupos en obra, así se dejará el diseño de 12.020 cupos adicionales, para un total de 27.000 cupos gestionados durante el cuatrienio, para esto se dispondrá de predios cedidos al INPEC, con áreas de mínimo diez hectáreas, con disponibilidad de servicios públicos, y con uso dotacional para actividades penitenciarias y carcelarias (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019).

6.3. Vida en Reclusión.

Toda persona privada de la libertad tiene derecho a una vida digna en reclusión y al goce efectivo de sus DDHH, tal como lo establece la corte Constitucional:

(...) El suministro de la alimentación básica y adecuada es una obligación del Estado que se deriva de la relación de especial sujeción que existe frente a la persona privada de la libertad, cuya satisfacción es sin duda de vital importancia para la protección de los derechos fundamentales de los reclusos, entre ellos, los derechos a la vida, a la salud y a la integridad (Sentencia T-268 de 2017).

En ese orden de ideas, el actual Gobierno busca mejorar las condiciones de salud y alimentación de la población privada de la libertad, en cuanto a la prestación de dichos servicios, con una infraestructura adecuada, un sistema de información robusto que registre las acciones propias del servicio, una distribución razonable en raciones de alimentos y una buena calidad en el suministro de medicamentos, se observa la necesidad de hacer este ajuste para evitar los problemas ya presentados en materia de cumplimiento, salubridad y componente nutricional que se han observado a lo largo del tiempo (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019).

6.4. Resocialización.

En las últimas décadas, las cárceles colombianas han sido el escenario propicio para el debate constitucional sobre el respeto de los derechos fundamentales de los reclusos, dentro de un ambiente que se encuentra en crisis (Iturralde, 2011), pues se parte de la legitimidad de la imposición de esta medida privativa de la libertad en un Estado Social de Derecho fundado en respeto por la dignidad humana.

La aplicación de este modelo rehabilitador en el país es preponderantemente intramural, lo cual se adscribe a la paradoja de pretender educar para la libertad con ausencia de esta (Mir Puig, 1989), no se debe olvidar que uno de los fines esenciales de la pena, es la efectiva resocialización del recluso, mediante actividades propias del tratamiento penitenciario, como lo son, programas educativos, de formación espiritual, cultural, deportivo y de trabajo. Volver a socializar, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, la técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores (Hernández Jiménez, 2017).

Como fue precisado en la Sentencia T-762 de 2015, uno de los estándares constitucionales que debe incorporar una política criminal respetuosa de los derechos humanos es considerar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019), pues la privación de la libertad además que cumplir con ese fin resocializador, debe ser una herramienta de prevención de la reincidencia, según el criterio dado por la Honorable Corte.

6.5. Transparencia (eje transversal).

Se ha trabajado en la formulación de un plan de acciones inmediatas, así como a mediano y largo plazo, para promover la transparencia en los ERON, las cuales contemplan un estudio de los riesgos asociados a la corrupción en los establecimientos de reclusión, dentro de estas acciones se busca la recolección de información y datos a partir de la realización de encuestas voluntarias a los reclusos, en los que se indague respecto de su percepción de los actos contrarios a la transparencia.

Dentro de algunas estrategias plantadas por el Gobierno Nacional, me permito citar las siguientes:

- Promover el fortalecimiento de los controles externos de las personas y elementos que ingresen a los establecimientos de reclusión
- Promover la creación de mecanismos de denuncia con entidades competentes frente a hechos delictivos al interior de las prisiones
- Promover la implementación de operativos e investigaciones en los centros de reclusión
- Promover el fortalecimiento del control y vigilancia de quienes se encuentran privados de la libertad en prisión domiciliaria (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019).

7. Proyectos adelantados por el Comité Interdisciplinario para la superación del ECI.

La Honorable Corte Constitucional mediante la sentencia T-762 de 2015 ordenó la creación del Comité Interdisciplinario para la estructuración de normas técnicas sobre la Privación de la Libertad. Este Comité está conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y

del Derecho (responsables de liderar el proceso), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios - USPEC; su objetivo es identificar los parámetros técnicos que permitan consolidar condiciones de reclusión dignas tanto en los Centros Penitenciarios como Carcelarios.

El Auto 121 de 2018 por su parte estableció que la superación del estado de cosas inconstitucional debe garantizar el goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad, y para ello estableció cuatro pilares de seguimiento: **i)** Base de datos y el sistema de información sobre Política Criminal, **ii)** Normas técnicas sobre privación de la libertad, **iii)** Línea base, y **iv)** Definición de los indicadores de goce efectivo de derechos (Corte Constitucional, 2019), los cuales deben dar cuenta de los mínimos constitucionalmente asegurables en un escenario carcelario, orientando lo anterior a seis ejes principales a saber: infraestructura, resocialización, servicios públicos, alimentación, acceso al agua y salud (Defensoría del Pueblo, 2019)

7.1. Creación de batería de indicadores.

El Comité Interdisciplinario del anterior Gobierno por su parte identificó cerca de 1.200 indicadores; varios de los cuales recaían en el cumplimiento de normas y no se dirigían a la verificación del avance en la materialización de los derechos. En razón de lo anterior y dando cumplimiento a la reorientación dada por el actual Gobierno, el Comité⁶ si, para indicar quienes hacen parte del comité concentró sus esfuerzos en recoger los aportes y comentarios de las diversas Organizaciones y Entidades, los cuales fueron expuestos en la Audiencia Pública del 25 de octubre de 2018, que coincidían en indicar las serias dificultades de efectuar una medición con los 1.200 indicadores remitidos en la batería anterior, así como en atender las consideraciones realizadas por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 141 de 2019.

Como consecuencia de lo anterior, esta Comisión citó a los funcionarios técnicos de cada una de las entidades dependiendo del eje temático que se discutiera en concordancia con lo establecido en el Auto 121 de 2019. Durante estas sesiones se estructuró una nueva propuesta de batería de indicadores conformada por: **(i)** 7 Componentes mínimos asegurables, **(ii)** 8 Problemas

⁶ Defensoría del Pueblo - Ministerio de Justicia y del Derecho.

estructurales, (iii) 27 Fallas existentes, (vi) 24 Resultados deseados, (v) 103 *Estándares mínimos* y (vi) 172 Tareas por cumplir (Defensoría del Pueblo, 2019).

TABLA 2. Componentes mínimos

Infraestructura carcelaria (como garantía para la satisfacción de los mínimos de la vida en reclusión)
Derecho a la salud
Alimentación al interior de los centros de reclusión
Servicios Públicos Domiciliarios
Resocialización (como fin y eje articulador de la pena)
Política criminal (Transversal a los indicadores de goce efectivo de derechos)
Acceso a la Administración Pública y a la Justicia

Fuente: (Defensoría del Pueblo, 2019)

Por su parte, los problemas estructurales que se derivan de estos componentes mínimos son:

TABLA 3. Componentes mínimos

Deficiente ruta de comunicación entre PPL y el establecimiento que garantice el derecho fundamental de petición (Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección Política Criminal , 2019)
Deficiente sistema de salud (Sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país)
Hacinamiento como causa de la violación masiva de derechos
Inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en la cárcel y manejo de alimentos
La Defensoría Pública no tiene la capacidad para satisfacer la demanda actual de las personas que lo requieren

La imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la pena que cumpla el estándar constitucional
Política Criminal Inconstitucional
Reclusión conjunta de sindicados y condenados

Fuente: (Defensoría del Pueblo, 2019)

El Informe presentado por la Defensoría del Pueblo (2019) (Defensoría del Pueblo, 2019), expone a la Honorable Corte, la nueva estructura que tuvo en cuenta las órdenes impartidas en la Sentencia 762 de 2015 y el Auto 121 de 2018, donde se identificó como primera medida las condiciones mínimas asegurables, que posteriormente el comité denominó *Estándares mínimos constitucionalmente asegurables*. Esta metodología, se fundamentó principalmente en los problemas estructurales identificados por la Corte Constitucional, asociados a unos componentes mínimos de derechos que deben ser garantizados a la población privada de la libertad.

Una vez el Comité aprobó la batería de indicadores, también consideró de común acuerdo, que la validación de las normas técnicas debería construirse simultáneamente con las fichas técnicas, utilizando un lenguaje claro y con términos sencillos, definiendo específicamente las tareas y las instituciones responsables de la captura de la información; fundamentó su decisión en el hecho de que la persona que estará en terreno levantando la información pueda realizar esa actividad con la menor cantidad de inconvenientes.

Aunado a lo anterior, se le informó a la Honorable Corte que el levantamiento de la línea base iniciaría el lunes 8 de Julio del presente año, y que la entrega formal se hará el día 7 de diciembre de 2020 (Defensoría del Pueblo, 2019).

7.1.1 Resocialización.

Actualmente, según el informe emitido por ibídem el (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cuenta con una planta de 1.913 funcionarios administrativos y 12.848 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia para una población privada de la libertad de 119.000 PPL.

Los programas deberán ser evaluados para generar una política de resocialización con vocación de sostenibilidad, lo cual implica establecer las condiciones de calidad de los programas de formación en los establecimientos penitenciarios y métodos de evaluación que den cuenta de los logros de desempeño individual, de los programas y la política en general, según lo establece la sentencia T-762 de 2015.

Por otro lado, esta sentencia ibídem establece que debe garantizarse el acompañamiento permanente durante el periodo en que se prolonga la privación de la libertad, con el auxilio de un equipo interdisciplinario de profesionales en ciencias sociales y de la salud, de la red de apoyo y de la familia del recluso .

La pena privativa de la libertad no debe entenderse únicamente un sentido retributivo que implica mirar hacia el pasado, sino que tiene un sentido transformador de las relaciones sociales, al momento del retorno a la libertad (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019) de modo que la comunidad y el sujeto que retoma su vida, se reencuentren armónicamente cuando este recobre el ejercicio pleno de sus derechos.

Agregado a lo anterior, se evidencia las siguientes problemáticas:

Tratamiento Penitenciario

- 19 establecimientos de reclusión del orden nacional operan con el mínimo requerido de profesionales (Abogados, psicólogos y/o trabajadores sociales y seguridad.
- 13 establecimientos de reclusión del orden nacional no tienen implementado el programa de preparación para la libertad.
- Se identifican 23.000 personas privadas de la libertad condenadas pendientes por seguimiento en fase de tratamiento.
- Se identifican a 1.780 personas privadas de la libertad condenadas sin fase de tratamiento.
- Se identifican 31.075 sindicados y condenados que no cuentan con asignación de actividades ocupacionales.

Educación en los establecimientos de reclusión del orden nacional

- El 80% no tiene el apoyo de docentes y licenciados.
- El 40% carecen de aulas educativas adecuadas (educación formal).
- El 60% no cuenta con convenios y/o alianzas con entes territoriales para programas de cultura, recreación y deporte.
- El 60% no cuenta con ambientes de aprendizaje para el desarrollo de los cursos SENA.
- El 30% cuenta con falencia de materiales y equipos para el desarrollo de los cursos SENA.

Industria Penitenciaria

- Actualmente no existe una industria penitenciaria en el SPC (autoabastecimiento y maquilas).
- La dotación anual requerida para las personas privadas de la libertad es de 157.962 uniformes y 78.981 pares de calzado. Sin embargo, la producción actual es de 65.505 (41%) uniformes y 16.042 pares de calzado (20%).
- Se requiere aumentar la capacidad productiva en un 59% en uniformes y un 80% en calzado.
- No ha sido parametrizada la afiliación y pago de cotización a la ARL de las personas privada de la libertad.
- Se identifica una falta de competitividad y calidad de los productos comercializados con la Marca Libera Colombia.

Pospenados

- El 60% cuenta con dificultad para acceder al sistema financiero.

- El 15% de la población que obtiene el beneficio de su libertad en Bogotá, accede a los servicios Casa Libertad.
- Solo el 0.3% de las 735 empresas sensibilizadas durante la vigencia del convenio Casa Libertad, accede a contratar población pospenada.

Los datos relacionados anteriormente, fueron extraídos del Plan de Transformación y Humanización presentado por el (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2019) a la Honorable Corte Constitucional.

7.1.2 Derecho a la salud.

Este derecho se constitucionalizó de forma expresa en los artículos 44 y 49 de nuestra actual Carta Magna como un derecho inherente a la persona, motivo por el cual, el presente Gobierno no siendo ajeno a la situación evidenciada por la Corte Constitucional, identificó los establecimientos de acuerdo con problemas asociados a la salud, con la intención de salvaguardar este derecho en conexión al derecho a la vida de la PPL, y enmarcados en la normatividad vigente, avanzó en el fortalecimiento de los procesos de atención en salud, en el marco lógico de su modelo de atención (Comité Interdisciplinario seguimiento del ECI, 2019).

Inicialmente, la prestación integral de estos servicios es contratada por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, por instrucción de la USPEC, en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 145 de 2019, suscrito con dicho Consorcio, conformado por las fiduciarias FIDUPREVISORA (con un 90% de participación) y FIDUAGRARIA (con el 10% restante); para administrar y pagar de los recursos del Fondo Nacional de Salud (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019).

Así las cosas, al interior de los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON), se prestan los servicios de salud de primer nivel o baja complejidad que incluye medicina general, enfermería, odontología, toma de muestras de laboratorio clínico y suministro de medicamentos y dispositivos odontológicos, con la inclusión en 8 de ellos del servicio intramural de fisioterapia.

7.1.3 Servicios públicos.

Deben garantizarse condiciones cualificadas de reclusión en aspectos básicos como el goce permanente de servicios públicos esenciales, buenas condiciones de alojamiento, alimentación balanceada y servicios sanitarios mínimos⁷.

La sentencia T-762 de 2015 establece dentro del grupo de servicios públicos domiciliarios esenciales el acceso al agua potable, el cual tiene el carácter de fundamental cuando está destinado para el consumo humano, ya que en esta circunstancia se encuentra en conexión directa con otros derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud, la educación y la salubridad pública.

La Corte Constitucional exige que la priorización que se presente muestre “el acceso real y efectivo al líquido vital que tienen diariamente las personas privadas de la libertad en los ERON” pero es necesario aclarar que este dato concreto se tendrá, una vez se levante línea base. A lo sumo, es posible identificar la cantidad de agua que entra el establecimiento ERON y, a partir de ese dato, inferir cuánta agua hay disponible para cada PPL, pero hasta no hacer el levantamiento de línea base (indicadores del goce efectivo de derechos) no es viable dar un valor exacto (Comité Interdisciplinario seguminiento del ECI, 2019).

7.1.4 Alimentación.

Lograr que la Población Privada de la Libertad consuma de manera oportuna y con calidad los alimentos en los diferentes establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, lleva consigo la adquisición y puesta en operación de aspectos tales como: costeo y adquisición de los alimentos (insumos y materias primas), transporte, contratación del talento humano, compra e instalación y mantenimientos de equipos de cocina y menaje, dotación del personal, análisis microbiológicos de los alimentos, y se incluye el costo adicional de la entrega de alimentación extramural como son transporte, talento humano y empaque (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019).

⁷ Auto 121 de 2018.

Al 20 de mayo de 2019 se identificaron las siguientes novedades por parte del Instituto Penitenciario y Carcelario:

La mayor cantidad de incumplimientos reportados se presentan en los establecimientos de la regional central seguida de la regional Noroeste y Norte.

En relación a los incumplimientos por calidad de la alimentación, gramajes y menús, se presentan en mayor proporción en las regionales de Noroeste y Central, seguida por la regional Norte.

Dentro de lo reportado por los establecimientos, visitas y entes de control, se han identificado establecimientos críticos que han manifestado inconvenientes desde antes de la actual contratación, los cuales continúan reportando irregularidades (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019).

Es necesario aclarar que el (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019) en su sexto informe manifestó, que si bien los procesos de adjudicación del servicio de alimentación cambiaron de licitación pública a operaciones mediante la bolsa mercantil de Colombia –BMC en el año 2016, la USPEC actualmente se encuentra en la búsqueda de un nuevo modelo de contratación que minimice los hallazgos y novedades reportadas dentro de la ejecución y mejore el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del vendedor.

7.1.5 Acceso a la administración pública y de justicia.

Debe entenderse como la posibilidad que tiene cualquier persona de acudir ante el órgano judicial para que, a través de un procedimiento preestablecido, obtenga protección jurídica de los derechos que considera desconocidos por la actividad de un particular o del mismo Estado⁸.

Ahora bien, actualmente por iniciática de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C, se vienen efectuando las jornadas jurídicas con enfoque de género - mujeres, en el Reclusorio el Buen Pastor (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019), junto con la asistencia y participación de varias entidades entre esas el Ministerio de Justicia y del Derecho,

⁸ Sentencia T-043 de 1993.

dichas jornadas tienen como propósito ayudar a efectivizar los derechos fundamentales que les asisten a las personas privadas de la libertad, eliminando barreras y obstáculos administrativos, dirigiendo así el accionar de todas las autoridades judiciales.

7.1.6 Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.

Como resultado del análisis realizado a la situación del estado de la infraestructura penitenciaria, y los impactos constitucionales, ambientales, sanitarios y sociales, surge la necesidad de proporcionar soluciones en el corto plazo a la problemática de hacinamiento y de falta de infraestructura en los establecimientos penitenciarios y carcelarios (Comité Interdisciplinario seguminiento del ECI, 2019).

La USPEC busca implementar un sistema de infraestructura que permitirá la construcción de áreas de reclusión, sanidad y rancho para cubrir las deficiencias que hoy se presentan. Los establecimientos contemplados serán de mediana y mínima seguridad, cumpliendo con los estándares y normas técnicas establecidas en la sentencia T- 762 de 2015, auto 121 de 2018, sentencia T- 388 de 2013, normas internacionales y normas Nelson Mandela. (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019).

Para el desarrollo de los proyectos la USPEC ha estudiado al menos tres alternativas constructivas (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019) que permitan atender las necesidades anteriormente descritas así:

- 1. Estructuras metálicas con recubrimiento bioclimático.**
- 2. Estructuras en concreto prefabricado.**
- 3. Estructura en fundición tipo encofrado.**

El diseño, además de contar con las condiciones que garanticen el goce efectivo de derechos, debe garantizar como mínimo un área de 20 mts² por PPL en establecimiento, teniendo en cuenta solo las áreas a las que tiene acceso la población reclusa para su hábitat, procesos de

resocialización, redención de pena, trabajo y contacto familiar, además de las áreas destinadas para su servicio (sanidad, rancho, talleres).

- ✓ Áreas de celdas individuales
- ✓ Áreas de celdas colectivas
- ✓ Altura mínima de las celdas
- ✓ Áreas mínimas de camastros
- ✓ Cantidad de unidades sanitarias por PPL
- ✓ Cantidad de duchas por PPL (Ariza, 2011) (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019)

8. Proyecto de atención Pos-Penitenciaria para la disminución de la reincidencia (Casa Libertad).

Este proyecto busca disminuir el riesgo de reincidencia y fomentar la cultura de la legalidad, contribuyendo así, con la inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que han estado privadas de libertad en un centro penitenciario (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019), actualmente se cuenta con el apoyo de universidades y organizaciones sociales para el desarrollo de esta iniciativa.

El Ministerio de Justicia y del Derecho avanza en la suscripción de convenios que permitan la implementación del programa con otros entes territoriales. Casa libertad establecerá comunicación permanente con los empresarios previamente sensibilizados y vinculados al proceso (Ministerio de Justicia y del Derecho), a fin de apoyar los requerimientos y conocer los logros, dificultades y necesidades que se presenten con los usuarios vinculados laboralmente.

9. Capacitaciones a los Gobernadores Locales y Departamentales.

El Ministerio de Justicia y del Derecho (2019), (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019) está diseñando un módulo que le permita participar de forma activa a los alcaldes y

gobernadores que sean electos para los próximos periodos del gobierno local y departamental. Con esto se busca la concientización de las responsabilidades del ente territorial frente al sistema carcelario y penitenciario, así como la sensibilización de la problemática actual, con miras a que se dispongan recursos económicos, humanos y administrativos a la atención de esta problemática.

10. Cartilla sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario.

Por medio de esta cartilla se pretende generar una hoja de ruta que permita informar a los alcaldes y gobernadores, sobre sus obligaciones frente al sistema penitenciario y carcelario, teniendo como temario, (i) Contexto: Necesidad de articulación entre el Gobierno Nacional y las entidades, (ii) Obligaciones de las entidades territoriales frente al sistema carcelario, (iii) Forma de cumplir las obligaciones de las entidades territoriales frente al sistema carcelario. Esta herramienta es socializada en las mesas penitenciarias que se realizan a nivel nacional, con el fin de reforzar el cumplimiento de sus obligaciones (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2019).

Conclusiones.

Con la creación de la institución jurídica del ECI en el año 97, se buscó proteger los derechos fundamentales de la minoría de la población colombiana, quizá uno de los principales aportes del constitucionalismo colombiano a la jurisprudencia nacional e internacional. Pues fue así, que un año más tarde, la sentencia T-153 de 1998, declaró el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del territorio nacional, ordenando al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación, elaborar un plan de construcción carcelaria tendente a garantizar las condiciones de vida dignas de todas las personas privadas de la libertad.

Desde entonces los derechos fundamentales de toda esta población, empezaron a ser protegidos por los mecanismos de tutela y las acciones populares instauradas, dando origen a históricas sentencias sobre los derechos a la dignidad humana, la vida e integridad personal, la familia, la salud, la educación y el trabajo; es de anotar que el surgimiento de estas herramientas trajo consigo la mala costumbre, por parte de las autoridades de utilizar el derecho de petición y la tutela como un requisito de trámite para el cumplimiento de sus obligaciones; haciendo que

estos hicieran parte de uno de los tramites y procedimientos internos de cada institución, conllevando al tiempo una sobrecarga en el sistema judicial.

Es importante aclarar que a la fecha la vulneración de los derechos de la población privada de la libertad persiste, y que son las autoridades del gobierno nacional quienes deben trabajar de manera ardua en contra de las inhumanas condiciones en las que permanecen los reclusos, donde es el Estado quien debe procurar la garantía efectiva de los mismos, por el hecho mismo de la reclusión, que hace imposible para estas personas garantizar por sí mismas condiciones idóneas de vida.

Para ello, el actual Gobierno Nacional, acatando las labores de articulación señaladas por la Corte durante los últimos años, diseñó un esquema de seguimiento a las órdenes de las sentencias y creo estrategias metodológicas para garantizar ese goce efectivo de derechos fundamentales de las personas en reclusión. El presente artículo buscó resaltar de una forma más clara cuál es ese papel preponderante actual que desempeña el Comité Interdisciplinario conformado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario y la Defensoría del Pueblo, encargados de dar cumplimiento a las órdenes impartidas.

El plan de transformación y humanización del sistema carcelario, es una de las estrategias que adelanta este Gobierno, basado en el respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión; enfocado hacia la humanización del tratamiento de las personas privadas de la libertad, así como un proceso de resocialización satisfactorio.

Otra estrategia y dando cumplimiento a la sentencia T-762 de 2015, se creó el Comité Interdisciplinario, quien fue el encargado de estructurar una nueva propuesta de batería de indicadores para garantizar el goce efectivo de derechos de la PPL; esta comisión estableció 103 estándares mínimos; los cuales serán medibles en una labor de campo que se hará con el fin de obtener datos reales, en cuanto a la prestación servicios en salud, alimentación, servicios públicos, planes de tratamiento para la resocialización, acceso a la justicia y proyectos de infraestructura.

Conforme a lo anterior, se debe reconocer la labor que está desempeñando el grupo líder de seguimiento en cuanto a la superación de esta problemática, si bien es cierto que llevamos más de 20 años sin lograr la superación el ECI, es de anotar los esfuerzos humanos y presupuestales que

se han desplegado para ello, en donde semestralmente cada año, se presenta un informe en donde visualizan todas las acciones impartidas, en cuanto a gestiones administrativas, inversión de recursos y esfuerzos de articulación interinstitucional, demostrando así el compromiso de avanzar y superar los estancamientos presentados hasta este momento.

Referencias Bibliográficas

Académicas

- Aguilar Castillo, J., & Bohórquez. (2006). El Estado de Cosas Inconstitucional: Aplicación, balance y perspectivas. Bucaramanga. Colombia.
- Alicia, R. C. (s.f.). La Declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, análisis de la jurisprudencia constitucional colombiana, Trabajo de Investigación. Universidad Libre de Colombia. Bogotá, D.C.
- Ariza, L. (2011). Reformando el infierno: los tribunales y la transformación del campo penitenciario en América Latina. In: Ariza, L; Iturralde, M. Los muros de la infancia. Prisiones en Colombia y en América Latina. Bogotá D.C. : Universidad de los Andes .
- Blandón, L. F. (2017). El principio de inmediatez de la acción de tutela: ¿Una barrera para la protección judicial de los derechos fundamentales? Antioquia.
- Cárdenas, B. R. (2011). Contornos Jurídicos Facticos del ECI. Bogotá: Universidad 6 Externado de Colombia.
- Chinchilla, H. J. (2009). ¿Que son y cuáles son los derechos fundamentales? Bogotá D.C. ,Temis.
- Díaz, V. X. (2017). Legitimidad de la facultad discrecional de la Corte Constitucional de Colombia, en la declaración del estado de cosas inconstitucional. Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia Facultad de Derecho. Bogotá, D.C.
- Estanislao, Y. A. (2015). La dignidad humana, el caso de los internos en establecimiento carcelario desde la T-153 DE 1998. Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia Facultad de Derecho. . Bogotá D.C.

- Hernández Jiménez, N. (2017). La Resocialización como fin de la pena – Una frustración del sistema penitenciario y carcelario colombiano. Universidad Libre y Universidad de los Andes.
- Hernández, C. I. (2003). “La Garantía de la Dimensión Objetiva de los derechos fundamentales y labor del juez constitucional Colombiano en sede de tutela: El llamado Estado de Cosas Inconstitucional”. Santiago de Chile: Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca.
- Mateo, G. R. (2010). El Estado de Cosas Inconstitucional análisis de los motivos de la Corte Constitucional para su declaratoria. Medellín.
- Mir Puig, S. (1989). ¿ Qué queda en pie de la resocialización? Eguzkilore.
- Montenegro, G. (2015). Las incidencias del estado de cosas inconstitucional en la jurisprudencia colombiana, el desplazamiento de los resguardos Nulpe medio y Gran Sábalo de la Comunidad Indígena Awá. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Plazas, M. A. (2008). El poder de la corte constitucional en Colombia y el llamado “estado de cosas inconstitucional”. México: Revista de temas constitucionales instituto de investigaciones sociojurídicas.
- Ramírez, B. M. (2013). El " estado de cosas inconstitucional" y sus posibilidades como herramientas para el litigio estratégico público, una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana. Lima.
- Rodríguez Pineda, A. C. (1998). Sistema Carcelario Colombiano. Apremiante cambio de cárceles por factorías de prisión y otros aspectos sociales. Bogotá, D.C.: Jurídicas Gustavo Ibañez.
- Rojas. (2012). la declaración de ECI análisis de la jurisprudencia constitucional colombiana, trabajo de grado. Universidad Libre. Bogotá, D.C.
- Rosario, Universidad Colegio Mayor de nuestra Señora del. (2011). Desarrollo del sistema penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010, en el marco de las políticas del

Estado a partir de las sentencia de la Corte Constitucional. Instituto Rosarista de Acción Social –SERES–, 39.

Saravia Caballero, J. C. (2015). El Estado de Cosas Inconstitucional en Colombia. Bogotá.

Universidad Nacional Autónoma de México. (2015). La doctrina jurisprudencial del Estado de Cosas Inconstitucional. Respuesta judicial a la necesidad de reducir la disociación entre las consagraciones de la normatividad y la realidad social. México.

Vargas Hernández, C. I. (2003). Garantía de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y la labor del juez constitucional en sede de acción de tutela: El 103 llamado Estado de Cosas Inconstitucional. 203-338.

Legislativas

Comité Interdisciplinario seguimiento del ECI. (2019). Priorización de establecimientos carcelarios - Auto 110 requerimiento 20 de mayo de 2019. Bogotá D.C.

Defensoría del Pueblo. (2003). Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia. Bogotá, D.C.

Defensoría del Pueblo. (2019). Respuesta Auto 141 de 2019. Bogotá D.C.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. (2019). Informe estadístico. Bogotá, D.C.

Ministerio de Justicia y del Derecho . (s.f.). Responsabilidad social empresarial . Obtenido de <https://www.minjusticia.gov.co/Casa-Libertad/Responsabilidad-Social-Empresaria>

Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección Política Criminal. (2019). Acceso a la Administración Pública y a la Justicia. Bogotá D.C.

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2019). Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia. Bogotá, D.C.

Ministerio de Justicia y del Derecho. (2019). Sexto informe semestral del Gobierno Nacional al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario. Bogotá D.C.

- Ministerio de Justicia y del Derecho. (2019). Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia. Bogotá, D.C.
- Ministerio de Justicia y del Derecho. (2019). Sexto informe semestral del Gobierno Nacional al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario. Bogotá D.C.
- Ministerio de Justicia y del Derecho . (s.f.). Responsabilidad social empresarial . Obtenido de <https://www.minjusticia.gov.co/Casa-Libertad/Responsabilidad-Social-Empresaria>
- Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección Política Criminal. (2019). Acceso a la Administración Pública y a la Justicia. Bogotá D.C.
- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. (2019). Informe estadístico. Bogotá, D.C.
- Defensoria del Pueblo. (2003). Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en colombia. Bogotá, D.C.
- Defensoría del Pueblo. (2019). Respuesta Auto 141 de 2019. Bogotá D.C.
- Comité Interdisciplinario seguimiento del ECI. (2019). Priorización de establecimientos carcelarios - Auto 110 requerimiento 20 de mayo de 2019. Bogotá D.C.

Jurisprudenciales

Colombia, Corte Constitucional (1993). Sentencia T-043 de 1993. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.

Colombia, Corte Constitucional (1997). Sentencia SU559 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Colombia, Corte Constitucional (1998). Sentencia T-153 de 1998 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Colombia, Corte Constitucional (1998). Sentencia T-068 de 1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Colombia, Corte Constitucional (1998). Sentencia SU-250 de 1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Colombia, Corte Constitucional (1998). Sentencia T-590 de 1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Colombia, Corte Constitucional (1998). Sentencia T-289 de 1998 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

Colombia, Corte Constitucional (1998). Sentencia T-606 de 1998 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Colombia, Corte Constitucional (1998). Sentencia T-607 de 1998 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Colombia, Corte Constitucional (2000). Sentencia T-847 de 2000 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

Colombia, Corte Constitucional (2004). Sentencia T-025 de 2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

Colombia, Corte Constitucional (2013). Sentencia T-815 de 2013 M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos.

Colombia, Corte Constitucional (2013). Sentencia T-388 de 2013 M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

Colombia, Corte Constitucional (2015). Sentencia T-762 de 2015 M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Colombia, Corte Constitucional (2017). Sentencia T-268 de 2017 M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Colombia, Corte Constitucional (2018). Auto 121 de 2018 M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Colombia, Corte Constitucional (2019). Auto 110 de 2019 M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.